Capítulo 1

Del mercado y de otras alternativas económicas

Ana Castro Medina

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

CASTRO MEDINA, A. Del mercado y de otras alternativas económicas. In: *Economía popular y solidaria: ¿realidad o utopía?*. Caracterización de las entidades de fomento [online]. Quito: Editorial Abya-Yala, 2018, pp. 17-53. ISBN: 978-9978-10-490-3.
<https://doi.org/10.7476/9789978104903.0002>.

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](#).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](#).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](#).

CAPÍTULO 1

Del mercado y de otras alternativas económicas

El modelo ortodoxo y la primacía del mercado

Una economía de mercado es un sistema económico regido, regulado y orientado únicamente por los mercados. La tarea de asegurar el orden en la producción y distribución de bienes es confiada a ese mecanismo autorregulador. Lo que se espera es que los seres humanos se comporten de forma que puedan ganar el máximo dinero posible. Tal es el origen de una economía de este tipo.

(Karl Polanyi, 1997, p. 122)

El origen de la discusión sobre el término progreso y su adecuación a los diferentes espacios, se sitúa entre los siglos XVIII y principios del siglo XIX, donde se plantea el concepto de progreso en medio de los cambios producidos por la modernidad, matizado por un proceso social y económico denominado revolución industrial, la cual daba paso a un esquema de producción distinto del conocido hasta ese momento, superando el mercantilismo feudal y situando nuevos principios en el orden mundial.

Las preguntas formuladas por los pensadores clásicos en torno al progreso —entendido como capacidad de satisfacer las necesidades humanas mediante la innovación y el incremento de la pro-

ducción— tuvieron que incluir una interrogante que continuaría acompañando a todos los debates hasta los días presentes:

¿Podrían todos los países y todas las sociedades beneficiarse por igual del potencial generado por el capitalismo industrial o, por el contrario, estaríamos ante un juego de suma cero en el que lo que unos ganaran sería, necesariamente, a costa de lo que otros perdieran, como habían sugerido anteriormente los mercantilistas¹? (Unceta, 2014, p. 6).

En la revisión histórica de la emergencia de la economía de mercado realizada por Polanyi, este identifica que la irrupción de las máquinas especializadas en una sociedad agraria y comercial, integrada por agricultores y comerciantes que compran y venden el producto de la tierra; produjo efectos característicos e irreversibles en cierta medida. Al depender de las herramientas y de la tecnología, el proceso de producción depende de una dinámica incidental de la compra y la venta que no puede ser costeadada en tanto exista inversión orientada a las posibilidades de ganancia. El comerciante compra la mano de obra y las materias primas necesarias y entonces, genera el nuevo producto (Polanyi, 1997).

Dado que las máquinas refinadas son caras, sólo son costeables si se producen grandes cantidades de bienes. Tales máquinas pueden operar sin pérdida sólo si la venta de los bienes se encuentra razonablemente asegurada y si la producción no tiene que interrumpirse por falta de los bienes primarios necesarios para su alimentación. Esto significa, para el comerciante, que todos los factores involucrados deberán estar en venta, es decir, deben estar disponibles en las cantidades necesarias para cualquiera que esté dispuesto a pagar por ellos. Si no

1 Si bien nace como reacción frente al mercantilismo feudal, las ideas de Smith (1794) en su obra “La riqueza de las naciones”, plantea varios preceptos fundamentales para la concepción de desarrollo: a) El hombre, en tanto ser económico, tiende naturalmente al lucro; b) El orden del sistema está regido por iniciativas individuales que componen el bien social; c) La regla máxima consiste en dejar que el proceso económico siga su propio curso.

se satisface esta condición, la producción con el auxilio de máquinas especializadas resulta demasiado riesgosa para emprenderla desde el punto de vista del comerciante que arriesga su dinero y de la comunidad en conjunto que pasará a depender de la producción continua de ingresos, empleos y provisiones (Polanyi, 1997, p. 89).

Lo fundamental en la revisión histórica del paso entre distintos modelos de producción radica en que esta transformación implica un cambio en la motivación de los miembros de dicha sociedad. En este sentido Polanyi sostiene que la motivación de la subsistencia debe ser sustituida por la motivación de la ganancia. De esta manera, todas las transacciones se convierten en transacciones monetarias y éstas requieren, a su vez, la introducción de un medio de cambio en cada articulación de la vida industrial.

Todos los ingresos deben derivar de la venta de algo a otros, y cualquiera que sea la fuente efectiva del ingreso de una persona deberá considerarse como el resultado de una venta. Nada menos está implicado en el simple término de “sistema de mercado”, con el que designamos el patrón institucional descrito. Pero la peculiaridad más sorprendente del sistema reside en el hecho de que, una vez establecido, debe permitirse que funcione sin interferencia externa. Los beneficios ya no están garantizados, y el comerciante debe obtener sus beneficios en el mercado. Debe permitirse que los precios se regulen solos. Tal sistema de mercados autorregulados es lo que entendemos por una economía de mercado (Polanyi, 1997, p. 90).

Contradiendo lo que varias teorías posteriormente promulgarían, este paso representa más una metamorfosis que una especie de estadio necesario tras la evolución de las condiciones sociales, en términos de crecimiento y desarrollo continuos.² Tras una serie de significativos e inesperados cambios sociales, la teoría económica se

2 Varias teorías como la formulada por Rostow, identificadas como modelos ortodoxos, miran el crecimiento y el desarrollo como conceptos similares. Su enfoque busca la “perfección” de las llamadas economías primitivas hasta

encuentra con la idea del desarrollo como la posibilidad de seguir, sistemáticamente, una serie de pasos para llegar a un estado deseado, en función de generar condiciones que favorezcan el bienestar humano (Unceta, 2014).

En un contexto de emergencia de nuevas economías, sea por consolidación de los Estados-nación o por constitución de nuevos Estados tras la Segunda Guerra Mundial, varias teorías buscan marcar la línea divisoria entre los países desarrollados y aquellos que quieren serlo, buscando los mejores mecanismos para lograrlo. Aun cuando se pasó de mirar a los países “subdesarrollados” como un efecto del sistema y no como un paso previo en la evolución económica, el eje central de la valoración se mantuvo.

A lo largo de los dos últimos siglos, la defensa de un modelo y de una dinámica de crecimiento económico ha sido el centro de los planteamientos sobre el desarrollo. Este se ha convertido además en una de las bases principales para la permanente ampliación de la esfera de influencia del mercado. Esta defensa del crecimiento está relacionada con la apelación a las necesidades humanas y el imperativo de producir más para poder satisfacerlas; tiene relación directa con el incremento del empleo para mejorar las rentas de la población al provocar la instrumentación de indicadores de producción y monetarios como elementos simplificadores de la realidad económica y social así como se convirtió en coartada y escudo para desviar la importancia que el crecimiento ha logrado para evitar los debates sobre la distribución (Unceta, 2014, p. 16).

De tal forma se mantenía la perspectiva de identificar al desarrollo con el crecimiento económico y la producción relacionada a

llegar a formas de actividad económica modernas. Su carácter evolutivo, también propio de estos modelos, es criticado en tanto desconoce la realidad de otros pueblos con distintas formas de organización social, política y producción económica.

este, a través de indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), que presentaban limitaciones al medir la agregación nacional de los sectores productivos. De acuerdo con esta visión, en tanto el crecimiento económico sigue siendo el eje fundamental quedan relegadas a un segundo plano las cuestiones relativas al bienestar humano. Más aún, se pensaba que la desigualdad o la pobreza se resolverían esencialmente por medios económicos y como efectos derivados de aquellos que lograban acumular riqueza (Unceta, 2014; Gudynas, 2011).

El modelo heterodoxo y el bienestar humano

La pobreza y más concretamente la desigualdad,³ sumadas a patrones de consumo y de producción insostenibles en relación con el uso de los recursos naturales, constituyen algunas de las evidencias más fuertes por las cuales se empieza a cuestionar las teorías ortodoxas del desarrollo. Cuando se reconoció que los más ricos poseen en términos absolutos más recursos que los más pobres,⁴ que los efectos del abuso sobre el medio ambiente son evidentes y que las inequidades afectan a la población por factores más complejos como el género y los derechos humanos, entonces surgieron los cuestionamientos de manera progresiva.

En un contexto donde era imperante contar con nuevos marcos conceptuales, varios organismos multilaterales, entidades de cooperación, entidades gubernamentales y entidades académicas comenzaron

3 Según un reporte presentado por Oxfam en el 2015, el 1% más rico del planeta pronto poseerá más del 50% de la riqueza del planeta y más recursos que la mayor parte de la población mundial en su conjunto. (<http://www.bbc.com/news/business-30875633>). Coraggio señala para el caso de América Latina: “mientras el 10% de los hogares más ricos reciben (con la excepción de Costa Rica y Uruguay) por lo menos el 30% del ingreso, el cuarenta por ciento más pobre recibe (salvo Uruguay) entre el 9 y el 15% del ingreso.” (Coraggio, 2011, p. 92).

4 Si bien la desigualdad en nuestro país ha disminuido, todavía “el 10% más rico acapara 25 veces más ingresos que el 10% más pobre.” (Sánchez, 2014).

a plantearse la necesidad de definir los nuevos requisitos al momento de referirse al desarrollo; entre los que se reconocen temas tan diversos como: desarrollo social —acceso a educación, acceso a salud, equidad de género, igualdad en la distribución de recursos, derechos humanos—, sostenibilidad medio ambiental—conservación de los recursos naturales y consumo responsable—, institucionalidad y democracia —calidad de las instituciones, transparencia y combate a la corrupción, participación y cohesión social— (Sen, 1987; Unceta, 2014).

Si bien la discusión parecía girar en torno a nuevos factores, el centro de la problemática y los elementos principales seguían analizándose en relación con los elementos del mercado. Así, Unceta señala:

Pero, por otra parte, la inclusión de estos temas en el debate se produciría sin cuestionar algunos de los principales fundamentos teóricos y metodológicos de la ortodoxia: *la identificación del bienestar humano con el crecimiento económico*, la evaluación de éste en términos agregados, la sola consideración [de] las actividades monetizables, o la prioridad casi absoluta del ajuste macroeconómico sobre otras consideraciones (Unceta, 2014, p. 6).

Para revisar las propuestas que trascienden las teorías ortodoxas, Unceta advierte que es necesario remontarse al origen de la discusión en torno al progreso y al núcleo del desarrollo en sí mismo. En este sentido, el propio autor plantea tres elementos a considerar: 1) Revisar los fines y los medios del desarrollo, es decir el crecimiento en función de su contribución al bienestar, como incremento de capacidades, 2) Comprender el bienestar humano más allá de un desarrollo “nacional” estimado en términos agregados, 3) Identificar que los indicadores utilizados convencionalmente para evaluar el bienestar, avances y retrocesos, son limitados, y el factor ingresos es tan solo un elemento más de la ecuación (Unceta, 2014).

En contraposición a los planteamientos de Adam Smith, el premio nobel Amartya Sen intenta realizar un giro epistemológico a la teoría económica, cuando pronuncia uno de sus preceptos más

importantes: “la verdadera riqueza de una nación está en su gente” (Sen, 1987). De acuerdo con esta perspectiva, el objetivo del desarrollo se considera como la posibilidad de crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una calidad de vida, pero no mínima sino prolongada, saludable y creativa, más allá de la preocupación inmediata de acumular bienes de consumo y riqueza financiera. Esta evidencia argumentada hace más de una década fue encubierta por consideraciones técnicas acerca de los medios para alcanzar el desarrollo humano, y por el uso de estadísticas para medir los ingresos nacionales y su crecimiento.

Identificando los vacíos en las formas de concebir el desarrollo, Sen señala:

En primer lugar, las cifras sobre los ingresos nacionales, a pesar de ser útiles para muchos propósitos, no reflejan la composición de los ingresos ni los beneficios reales. En segundo lugar, los individuos generalmente valoran logros que nunca se materializan, o por lo menos no lo hacen inmediatamente, en términos de mayores ingresos o cifras de crecimiento: mejor nutrición y servicios médicos, mayor acceso a conocimientos, vidas más seguras, mejores condiciones de trabajo, protección contra el crimen y la violencia física, horas de descanso más gratificantes y un sentimiento de participación en las actividades económicas, culturales y políticas de sus comunidades. Obviamente, la gente también desea mayores ingresos como parte de sus oportunidades. Pero el ingreso no es la suma total de la vida humana (1987, p. 31).

Como resultado de estos planteamientos, se volvió imprescindible hacer énfasis en la necesidad de prestar atención en el vínculo entre crecimiento y desarrollo humano, por dos razones fundamentales:

i) Muchos países en desarrollo que registraban un rápido crecimiento notaban que el gran aumento de sus índices de PIB no ha-

bía logrado reducir las carencias socioeconómicas de importantes segmentos de la población⁵.

ii) Naciones industrializadas evidenciaban que un alto nivel de ingresos no necesariamente protegía contra la rápida expansión de problemáticas como el consumo de drogas o alcoholismo, enfermedades como el VIH, la falta de vivienda, la violencia o la ruptura de relaciones familiares.

Entonces, la experiencia frente a una mirada del desarrollo se volvió un recordatorio de que la expansión de la producción y de la riqueza es sólo un medio. El fin ulterior del desarrollo debería ser siempre el bienestar humano, en tanto la manera de relacionar los medios con ese fin se convertía en el aspecto central del análisis y de la planeación para el desarrollo en los países.

En un inicio se planteaba el desarrollo humano como un proceso mediante el cual se ampliaban las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluían la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo (Sen, 1987).

Esto se planteaba como un cuestionamiento frente a la mirada que ubicaba el ingreso como sustituto de todas las demás oportunidades

5 Para Amartya Sen, al momento de analizar las desigualdades, poner a la gente en el centro del análisis significa considerar muchas otras variables que dependerán de cada uno de los contextos y condicionantes en la vida de las personas. Al discutir en torno al tema del ingreso como medida suficiente para dar cuenta de la posibilidad de alcanzar bienestar, se debe considerar “la existencia de otros medios importantes y de la diversidad interpersonal en la relación entre los medios y nuestros diferentes objetivos”. El no reconocer que pueden existir diferencias en las condiciones de las personas, nos puede llevar a conclusiones fáciles respecto a una transición sencilla desde el ámbito de los ingresos al de las utilidades, del de los bienes elementales al de las posibilidades o del de los recursos al del bien-estar (Sen, Motta, & Mendes, 2000, pp. 41-43).

del ser humano, ya que el acceso sería, según este constructo teórico, el que posibilitaría el libre ejercicio de cualquier otra opción. Existen varias razones para refutar dicho argumento, entre las que se encuentran:

- El ingreso constituye un medio, no un fin en sí mismo. No es ni ética, ni moralmente bueno por sí mismo. Es facilitador, vía de acceso, no realización de posibilidades. En este sentido, podría utilizarse tanto para adquirir medicamentos como para adquirir armas. El bienestar de una sociedad depende del uso que se da al ingreso, de la manera y los sectores en los que se invierte, no del nivel del ingreso por sí mismo.
- El ingreso es una variable independiente respecto del desarrollo humano. La experiencia de los países muestra muchos casos de altos niveles de desarrollo humano con niveles modestos de ingreso, y de deficientes niveles de desarrollo humano con niveles de ingreso bastante altos. En principio, lograr un equilibrio entre ambos indicadores parecería ser lo más apropiado, siempre y cuando lo humano oriente las acciones.
- El ingreso de un país ofrece pocos indicios sobre sus perspectivas futuras de crecimiento. En tanto ejercicio de proyección, inclusive el denominado crecimiento económico (PIB) no necesariamente conllevaría desarrollo posterior para un país. Si el país ha invertido en su gente, como en desarrollo infantil por ejemplo, su ingreso potencial puede ser mucho mayor que aquel que presenta sus indicadores actuales; o viceversa.
- El ingreso por sí mismo, no ha logrado ser un factor que disminuye o minimiza el impacto de grandes problemáticas de varias naciones industrializadas.

Si bien estos puntos pueden poner en evidencia que necesariamente no existe una relación lógica entre bienestar e ingresos, el análisis

desde el desarrollo humano demanda comprender cuáles serán las formas más adecuadas para establecer o fortalecer esos vínculos contingentes. De esta manera, se concibe al desarrollo humano tanto como un proceso de “ampliación de las oportunidades de los individuos”, como el nivel de bienestar que puede ser alcanzado. El ser humano, como centro de análisis, alude a una concepción desde lo social; desde lo económico, el énfasis recae sobre el trabajo realizado por cada persona.

El sumak kawsay (buen vivir) y la economía social y solidaria

El reto del Buen Vivir, que en gran medida estará asociado al tema del trabajo, tendrá que resolverse por el lugar que se otorga al trabajo humano no simplemente para producir más, sino para vivir bien. Tratándose de un ejercicio colectivo mejor sería decir para “convivir bien”.

(Acosta, 2011, p. 20)

Decidimos construir... Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay.⁶

(Constitución del Ecuador, Asamblea Constituyente, 2008)

6 En tanto el sumak kawsay comporta concepciones ancestrales que pueden ser difícilmente comprendidas por el mundo occidental, es necesario ser cauteloso para no amontonar señala Simbaña, como si de una caja vacía se tratase, derechos, políticas, pautas morales y todo lo que se nos ocurra poner para mostrarnos amplios y originales, y así asegurar que el sumak kawsay es “la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos, en paz y armonía con la naturaleza, para la propagación de las culturas humanas y de la biodiversidad” (Simbaña, 2011, p. 219). (Cfr. Senplades, 2013).

Orígenes, concepciones y prácticas

Históricamente, el *sumak kawsay*⁷ ha subsistido en la memoria de las comunidades indígenas de la región andina como un sentido de vida, una ética que ordena las formas de interacción de la comunidad. En tiempos de los Estados originarios precolombinos, no solo servía para organizar la comunidad, sino toda la sociedad, incluso al Estado mismo, que se había hecho tributario de tal estructura de sentidos (Simbaña, 2011, p. 220).

Para Jubeto, Guridi, y Fernández-Villa, la economía comunitaria en el horizonte del buen vivir, plantea un nuevo paradigma que se explica desde el *ayllu*, como sistema de organización de la vida. El *ayllu* o comunidad, se comprende como “la unidad y estructura de vida”, es decir, el ser humano es sólo una parte de esta unidad que está compuesta por: animales, insectos, plantas, montañas, el aire, el agua, el sol. Inclusive todo lo que no se ve como los ancestros y otros seres, son parte de la comunidad. Todo vive y todo es importante para el equilibrio y la armonía de la vida (Jubeto, Guridi, & Fernández-Villa, 2014, p. 38).

El fundamento central de la concepción occidental es concebir al ser humano como individuo, es decir, como entidad separada de la naturaleza a la cual hay que dominar, someter, explotar, haciendo uso de sus recursos sin medida; más que por rendimientos de la pro-

7 Se reconocen varios conceptos para dar cuenta de versiones distintas al progreso/ desarrollo, como “suma qamañaen aymara, *sumak kawsayen* quechua, y ñandereco en guaraní”. Si bien entre las distintas voces indígenas existen diferencias de matiz, lo llamativo fue constatar la similitud de sentidos que denotaban un ideal de vida que no escinde al hombre y a la naturaleza, por un lado, y, por otro, que entre la vida material de la reproducción y la producción y la vida social y espiritual había una interconexión inseparable: hombre/mujer y naturaleza son parte de la Madre Tierra y entre ambos se establece una comunión y un diálogo mediado por una ritualidad que entiende a la Naturaleza como un ser sagrado (Prada, 2011, p. 228).

ducción. Entonces, se corre el riesgo de pensar y accionar una sociedad como civilizada mientras más alejada está del mundo natural. En tiempos de antaño mantener todo vínculo con la naturaleza era muestra de barbarismo. La naturaleza era concebida como contraposición a lo civilizado, a lo humano, a la razón, por lo tanto había que controlarla y someterla como mero objeto de dominio y máxima fuente de riqueza (Simbaña, 2011, p. 222).

Desde cada comunidad se genera una dinámica económica distinta, con relaciones de complemento y reciprocidad con la vida, con la Madre Tierra, la comunidad y la familia.

Cada relación económica no es con el fin de acumular el capital, sino esencialmente para preservar la vida. Por lo tanto, toda relación económica no sólo debe estar enmarcada en leyes económicas de interés humano, sino también en leyes naturales que cuiden la vida, la Madre Tierra, la comunidad y la familia. Bajo el principio del equilibrio, la complementariedad genera la distribución y la redistribución, según la necesidad del momento. En la comunidad, cada familia tiene el “derecho de relación” con la Madre Tierra de acuerdo con su número de miembros. En la dinámica de la complementariedad, los miembros de la comunidad reciben y aportan de acuerdo con sus necesidades y responsabilidades (Jubeto, Guridi, & Fernández-Villa, 2014, p. 39).

Como se señala, el concepto de Buen Vivir⁸ emerge de la cosmovisión indígena, recuperando sus principios centrales como la

8 El Plan Nacional para el Buen Vivir explica de esta manera el Sumak Kawsay: “Esta idea social de solidaridad y redistribución es diferente al ideal aristotélico de la Vida Buena. El Buen Vivir es una idea social movilizadora, que va más allá del concepto de desarrollo —que se encuentra vigente en la tradición occidental, pues está asociado a una noción más amplia de progreso. No se trata de un nuevo paradigma de desarrollo, sino de una alternativa social, liberadora, que propone otras prioridades para la organización social, diferentes del simple crecimiento económico implícito en el paradigma del desarrollo. El crecimiento económico es deseable en una sociedad, pero tam-

complementariedad, la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad. No es una versión de las teorías del desarrollo ni una nueva forma de medir el progreso, sino que descentra su eje conceptual y transfiere la discusión hacia el ser humano, la colectividad y el medio ambiente. En este sentido, el alcance de una discusión en torno al Buen Vivir como meta de una sociedad, implicará una revisión del estilo de vida vigente, desde las bases para fortalecer sus prácticas, así como el nivel de las clases altas, que sirven de horizonte de expectativas para gran parte de la población.

En la misma línea de pensamiento se deberá comprender, sobre las bases de equidades reales, la re-definición colectiva de las necesidades asumidas como constitutivas del ser humano, en función de elementos de satisfacción ajustados a las posibilidades que nos brinda tanto la economía como la naturaleza. Este proceso de cambio implica dar prioridad al precepto de suficiencia, visto cómo obtener lo que sea suficiente en función de lo que realmente se necesita; contraponiéndose a lo que, desde el paradigma desarrollista, se busca en función del mayor nivel de eficiencia en la producción y posterior consumo desmedido, con los inevitables efectos sobre las bases mismas de la sociedad y de la sustentabilidad ambiental (Acosta, 2014).

De lo expuesto se desprende, como es fácil colegir, que el mercado por sí solo no es la solución. El subordinar el Estado al mercado capitalista, conduce a subordinar la sociedad a las relaciones mercantiles y al egolatrismo individualista. Lejos de una economía sobre determinada por las relaciones mercantiles, en el Buen Vivir se promueve una relación dinámica y constructiva entre mercados, Estado y sociedad. Se busca construir una sociedad con mercados en plural, para no tener una sociedad de mercado, es decir mercantilizada. No se quiere una economía controlada por monopolistas y

bién importan sus pautas distributivas y redistributivas.” (Senplades, 2013, p. 14; las cursivas son mías).

especuladores. Tampoco se promueve una visión estatista a ultranza de la economía (Acosta, 2011, p. 24).

Acosta reconoce que existe cierta diversidad de mercados⁹, en correspondencia con la diversidad de formas de concebir las relaciones de producción y consumo respecto al trabajo humano. Es por esto, que no todo el sistema económico debe estar inmerso en la lógica dominante de mercado, gobernado por la ley de la oferta y la demanda, pues existen diversas relaciones que se inspiran en otros principios de indudable importancia, como la solidaridad.¹⁰ (Acosta, 2011, p. 26).

Para Simbaña el *sumak kawsay* no depende del desarrollo económico, como dicta el capitalismo, mucho menos del crecimiento económico exigido por el neoliberalismo y tampoco depende del extractivismo, de la explotación petrolera, minera y de otros bienes naturales bajo la promesa de una redistribución y una mayor participación estatal. El *sumak kawsay* depende de la defensa de la vida en general, de aquello que promueve la economía social de los pueblos. Por lo tanto, el *sumak kawsay* no es una referencia moral individual o idea abstracta (Simbaña, 2011, p. 223).

En tanto estas visiones integrales del mundo establecen una relación con la naturaleza mediada por la comunidad, se da por en-

9 La Constitución del Ecuador establece que el sistema económico se integrará por formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria.

10 Es vital comprender que el principio de solidaridad o redistribución se encuentra vigente en las políticas públicas de Estados de Bienestar o en diseños más contemporáneos y cercanos. Así por ejemplo, el principio de solidaridad intergeneracional se encuentra tras el funcionamiento de la seguridad social para los procesos de jubilación o protección social. Inclusive en prestaciones sociales como la alimentación, la salud o la vivienda. Acosta menciona que similar reflexión “se podría hacer para la provisión de educación pública, defensa, transporte público, servicios de banca pública y otras funciones que generan bienes públicos que no se producen y regulan a través de la oferta y la demanda. No todos los actores de la economía, por lo demás, actúan movidos por el lucro.” (Acosta, 2011).

tendido que el ser humano no está despojado de relaciones o de redes comunitarias. La reproducción es posible bajo la única condición de que establezca nexos de interdependencia mutua, donde el ideal está puesto en una vida de relaciones de reciprocidad y solidaridad. De lo anterior se deduce que el trabajo y la producción son actos colectivos de celebración (trabajo y fiesta), así como es colectivo el disfrute del bienestar y la manera de gestionar los recursos que posibilitan la reproducción de la vida (Simbaña, 2011).

En este orden, es preciso señalar algunos principios de esta plenitud, que pueden entrar en contradicción con las dinámicas de mercado; por ejemplo:

- Solidaridad social, en comunidad.
- La producción como resultado del trabajo mancomunado.
- El trabajo y la familia como responsabilidad familiar, colectiva y pública.
- Complementariedad como interdependencia humana entre seres diferentes.
- La producción con respeto a la Naturaleza.
- La producción como responsabilidad de familiar y colectiva.
- La Naturaleza es sagrada.

Es importante diferenciar dos dimensiones del Buen Vivir: a) la dimensión de la experiencia y la práctica, y b) la dimensión ético-política. Desde la primera, no es posible construir un solo concepto ni una sola línea interpretativa. El Buen Vivir, como principio y sentido de las políticas públicas y fundamento para la construcción del modelo de Estado y del modelo económico, está inspirado en el ideal indígena de una relación armoniosa entre los seres vivos que garantice la nutrición en el sentido de goce de los productos de la cosecha, asegurando a su vez, la diversidad, la vida y la igualdad en la redistribución (Prada, 2011, p. 230).

De forma muy somera, el buen vivir puede ser reconocido por su postura crítica a la ideología del progreso y su expresión en el desarrollo contemporáneo como crecimiento económico, intensa apropiación de la Naturaleza y sus mediaciones materiales. El buen vivir defiende asegurar la calidad de vida de las personas, en un sentido ampliado más allá de lo material, de lo individual y también del antropocentrismo. Se extiende también a lo espiritual y a lo comunitario, dando valor a la Naturaleza.

Bajo el buen vivir se reconocen los valores propios de la Naturaleza, y por lo tanto el deber de mantener su integridad, tanto a nivel local como global. Esto hace que esta perspectiva esté orientada a trascender el dualismo que separa sociedad de Naturaleza, y también romper con la concepción de una historia lineal, donde los países deben repetir los estilos y la cultura de las naciones industrializadas (Gudynas, 2011, p. 270).

Transición hacia otro desarrollo

Como señala Gudynas, las ideas del buen vivir se nutren de aportes determinantes de las culturas indígenas, y por lo tanto se desenvuelven en un campo intercultural. En sus características, se reconoce un horizonte de propuestas que buscan generar un cambio de prácticas y modelos de producir, con bajo impacto ambiental y con sujeción a otros principios. Esta nueva mirada permite que el ser humano se conduzca en un proceso de transición hacia un nuevo tipo de desarrollo, para lo cual se plantea empezar con una moderación del proceso extractivista, como límite del exceso humano respecto a los abusos de su modelo frente a la Naturaleza.

Pasar de un “extractivismo depredador” a un “extractivismo sensato”, donde se cumpla con normas sociales y ambientales, mediante controles efectivos y rigurosos, y donde se internalizan sus impactos. “Son los casos donde se utilizan las mejores tecnologías,

se disponen de adecuadas medidas de remediación y abandono de sitios, o se aplican estrategias de amortiguación y compensación sociales efectivas” (Gudynas, 2011, p. 281).

En este sentido, pensar en otro tipo de desarrollo o en un proceso más allá del conocido y ampliamente aplicado, no implica un retroceso, no es el efecto de la nostalgia respecto de un pasado pre-moderno como el descrito por Polanyi desde una revisión histórica, ni únicamente el presentado por el movimiento indígena sobre el modo en que han vivido los pueblos originarios durante siglos pero en contextos culturales particulares. Si bien nace de saberes ancestrales y se alimenta de ese conocimiento, así también se nutre de la vigente discusión sobre el impacto ambiental del sistema actual ecuatoriano, de las teorías de la identidad, de los nuevos movimientos sociales y formas de organización, entre otros aportes significativos. De tal manera, una transición a una nueva forma de desarrollo retoma, otorga y busca implantar nuevos sentidos así como un nuevo tipo de racionalidad que permita al ser humano vivir mejor y durante más tiempo en este mundo.

Coraggio, puntualiza con bastante precisión una larga lista de temas a ser incorporados en este proceso de transición, en lo que al trabajo se refiere. Así, por ejemplo, se requieren cambios en:

[..] las formas de apropiación, de propiedad y de uso (privado, comercial, colectivo, etc.) de productos del trabajo humano y de la energía natural; la discusión del derecho a la propiedad privada de medios de producción (límites a la concentración y centralización en manos privadas); el control entre empresas estatales o comunitarias de los sectores estratégicos; los límites a la propiedad de capital extranjero en sectores considerados claves para la soberanía económica; la cuestión del derecho de patentes (incentivos materiales a la innovación limitados); la exclusión del mercado de elementos esenciales para la reproducción de la vida (materiales de vivienda, remedios, alimentos, etc.); la expedición de una ley de herencias que acentúe el efecto redistributivo; la apropiación total

por el Estado o gravámenes a las rentas extractivas (minería, actividades agropecuarias, hidrocarburos, agua, electricidad,) actuales o potenciales; el establecimiento de la propiedad comunitaria de bienes ambientales (biodiversidad, hábitat, paisajes) no enajenables; el derecho al acceso y al reconocimiento social del trabajo en sus diversas formas (trabajo asalariado, acorde con una legislación laboral que reconozca tanto el derecho a un salario digno como los beneficios que la clase obrera fue logrando y que fueron arrebatados por las reformas neoliberales; trabajo por cuenta propia, individual, familiar o asociado; trabajo doméstico de reproducción; trabajo de formación; trabajo de participación); la reducción de la jornada de trabajo y abrir la posibilidad de experimentar diversas formas de distribución del trabajo entre los trabajadores, entre muchos otros aspectos fundamentales de uno de los mayores aportes del autor (Coraggio, 2011, p. 28).

La Economía Popular Solidaria: algunas consideraciones

Hablamos y debatimos sobre economía solidaria, consumo responsable, economía de la felicidad, democratización de la economía, economía del bien común, comercio justo, economía del don, reciprocidad, reproducción ampliada de la vida, ‘buen vivir’, Vivir Bien, etc. ... Muchos de ellos son, como acertadamente señala José Luis Coraggio, “nombres, prácticas, criterios y sentidos que se buscan mutuamente”.

(Unceta, 2014)

En tanto existen múltiples nombres, formas de ejercer, criterios y maneras de dar sentido que conviven, convergen, se fusionan y se buscan mutuamente por atracción para hacer un corpus de gran magnitud, se procurará diferenciar entre estos distintos tipos de elementos, de manera tal que el enfoque se centre, por un lado, en los conceptos —nombres, criterios y sentidos—, como un núcleo central sobre la Economía Popular, Economía Solidaria, Economía del Trabajo, Nueva Economía, y por otro lado, respecto en las prácticas, usos, relaciones de sus múltiples actores y los principios que rigen todo este entramado conceptual y vivencial.

Principios y conceptos

Revisadas las críticas a los modelos de economía ortodoxos, donde el desarrollo es comprendido y el crecimiento es medido en términos monetarios o de mercado, se buscó opciones que valoraran las actividades humanas en función del bienestar que producen para la vida de las personas y para las comunidades. En tal sentido, es indispensable reducir la esfera de influencia y predominancia del mercado, revalorizando las distintas formas de relacionamiento social, no solo como formas de hacer frente a la satisfacción de necesidades humanas, sino pensando en una mejor y más apropiada manera de generar vínculos entre las distintas dimensiones de lo humano: la dimensión personal, social y su entramado de interacción: la medioambiental.¹¹

Se ubica a los años setenta como el periodo en que la economía social conoció una notable expansión en Europa, especialmente en Francia, Bélgica, España y Portugal. De igual manera se reconoce un gran avance en Quebec y en amplias regiones latinoamericanas, siendo Argentina, Brasil, Chile y Ecuador países de referencia obligada. El amplio tratamiento del tema se atribuye al hecho de que la llegada de la crisis económica y los cambios operados en el escenario económico internacional desembocaron en una pérdida de capacidad de los Estados nacionales como dinamizadores de la economía, con capacidad de regulación y de generación de empleo (Jubeto, Guridi, & Fernández-Villa, 2014).

11 La Constitución en su artículo 283 determina que: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.”

Ciertamente, es necesario mirar las diversas formas de comprender la dinámica social, pero también es preciso recurrir a los conceptos clásicos de la economía, tales como producción, consumo, distribución, circulación o trabajo. El uso apropiado de los recursos es un factor a tomarse en cuenta, para reducir el impacto ambiental sobre el medio ambiente, disminuir las escalas de producción, los costos de transacción y, de esta manera, fortalecer las redes, mejorar la relación con el entorno y el territorio, potenciando las capacidades y condiciones de cada localidad, buscando pasar de una sociedad de mercado a una sociedad solidaria y sustentable (Unceta, 2014).

Para la llamada “economía convencional”, tanto el consumidor como el productor interactúan desde una lógica racional e individual, buscando el máximo beneficio para sí mismo. El consumidor busca maximizar el beneficio individual en elecciones racionales y el productor busca maximizar la utilidad personal en el consumo de bienes y servicios, sin consideraciones ulteriores respecto al efecto que sus acciones tengan sobre la sociedad, su comunidad cercana o el medio ambiente (Jubeto, Guridi, & Fernández-Villa, 2014).

De tal modo, sustentados en los principios liberales donde la propiedad privada constituye uno de los principales pilares de la economía, todo puede ser concebido como una mercancía susceptible de transacción monetaria; en tanto las actividades están institucionalizadas y guían la actuación de los agentes económicos así como ponen límites a sus decisiones, de conformidad con ciertas reglas formales e informales. Varias de estas reglas están plasmadas en marcos normativos que rigen la acción:

Todo ello se completa con un marco jurídico que garantice los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa, y con la existencia de instituciones que lo promuevan y lo regulen, de modo que se garanticen y legitimen el tratamiento como mercancías de los recursos naturales, el trabajo humano y el capital, cuyos precios (renta, salario e interés) se establecerán en el mercado a través del

mecanismo de la oferta y la demanda. (Jubeto, Guridi, & Fernández-Villa, 2014, p. 34)

La crítica que surge entonces de la mano de los planteamientos de Polanyi, si bien no es la única realizada a la economía de mercado¹², es la principal sobre la cual se someterán a análisis varios elementos. Este autor, tras un recorrido por la historia de la economía mundial moderna, reconoce que la economía de mercado no es una constante en la historia humana y su surgimiento, consolidación y apogeo como modelo capitalista, sino que es la etapa de una transición necesaria, pero también resultado de decisiones y procesos situados históricamente en los últimos dos siglos.

El centro de su teoría se sustenta sobre la idea de que la actividad económica no se reduce únicamente al intercambio de mercado, sino que incluye además los principios de redistribución, función realizada principalmente por el Estado, y la reciprocidad así como donación voluntaria que ejerce la sociedad civil. Todos los sistemas económicos que se conocen hasta el feudalismo de la Europa occidental se encuentran organizados siguiendo los principios de reciprocidad, de redistribución y de administración doméstica; o una combinación de los tres (Polanyi, 1997, p. 100).

-
- 12 Tanto la economía ecológica como la economía feminista brindan elementos adicionales al debate. Esta última, amplía el concepto de trabajo al ámbito del trabajo doméstico —incluido el trabajo de cuidados—. Revisa el rol fundamental del trabajo no remunerado y del trabajo informal. En este sentido, aporta a la economía solidaria sobre lo que se entiende por pleno empleo y trabajo emancipado, pues ello no es posible para las mujeres sin la división de las tareas domésticas entre quienes conviven en un mismo espacio. De la economía ecológica podemos retomar discusiones en torno a la comprensión del capital humano y del capital manufacturado como complementarios al capital natural, y como no intercambiables. La economía comunitaria plantea varios aportes, en tanto rescata una cosmovisión del mundo andino que se sitúa como contrapuesto a la economía de mercado, fundamentada en los principios de redistribución, reciprocidad y complementariedad (Jubeto, Guridi, y Fernández-Villa, 2014).

Estos principios que Polanyi identificó como resultado de su recorrido histórico, son coincidentes con la cosmovisión de los pueblos originarios de la región andina. Habrá que sumar dos principios que suman complejidad a esta dinámica de funcionamiento: la simetría y la centralidad; en tanto patrones de comportamiento de las organizaciones de las sociedades satisfacen las necesidades de la reciprocidad y la redistribución, sumado a patrones institucionales y principios que se ajustan mutuamente.

Lo fundamental es que la dinámica emerge y se regula desde la lógica de la organización social, de la sociedad misma y no desde lo individual; en tanto se mantengan sus principios vigentes:

No surgirán motivaciones económicas individuales; no tendrá que temerse ninguna reducción del esfuerzo personal; la división del trabajo se asegurará automáticamente; las obligaciones económicas se cumplirán puntualmente; y sobre todo se proveerán los medios materiales para una exhibición exuberante de abundancia en todos los festivales públicos. En tal comunidad queda descartada la idea del beneficio; se desprecia el regateo; se aclama como una virtud la donación; no aparece la supuesta propensión a trocar e intercambiar. En efecto, el sistema económico es una mera función de la organización social. (Polanyi, 1997, p. 98)

Se requiere superar la lógica del mercado como estructura organizadora de la sociedad en función de principios que permitan interacciones institucionalizadas estructurantes, no solo estructuradas, concertadas, consensuadas y legitimadas. a partir de la implementación de principios como la reciprocidad, la redistribución y el intercambio más allá del mercado o través del mismo, pero no para el mercado ni bajo su mandato, desde una pretendida autorregulación o autocontrol místico.

La reciprocidad sitúa las relaciones desde un lugar de simetría, de equidad, en condiciones homogéneas en el doble movimiento del dar y el recibir, cuestionando la racionalidad utilitarista que se busca

a sí misma. La reciprocidad, en tanto organizador social, trasciende los aspectos económicos y se vincula a cuestiones simbólicas de prestigio —capital simbólico diría Bourdieu—, en tanto característica que sitúa el valor en el otro, no en el rédito propio, el cual es agente de cohesión al momento de realizar ejercicios de intercambio.

La redistribución, como forma de integración social que facilita una relación piramidal por el ejercicio de una centralidad, surge desde un patrón redistributivo como pauta que permite tanto la agrupación como el reparto, lográndose tanto un pacto sustentado en la costumbre o en la ley. Implica una institucionalidad reconocida y legitimada sobre la cual descansan los esquemas redistributivos (Unceta, 2014).

De cualquier forma, como advierte Unceta, el intercambio tiene que darse a través del mercado, aun cuando se busque su redimensionamiento, su delimitación como factor influyente sobre las relaciones sociales:

Este tipo de intercambio ha adoptado muy diferentes formas a lo largo de la historia en unos y otros tipos de sociedades, y representa la posibilidad de una relación entre puntos dispersos o fortuitos del sistema. Para poder generar integración y asociación entre las partes, el intercambio precisa de un sistema que se rige sobre la base de precios y de mecanismos de oferta y demanda. Ahora bien, esto requiere también de una racionalidad utilitarista, que incide en la consideración de las opciones más ventajosas a la hora de comprar o vender. Y significa igualmente la necesidad de una cierta institucionalización, de unas reglas —más o menos precisas según el grado de complejidad social— para que el mercado pueda funcionar. (Unceta, 2014, p. 146)

En tanto se busca lograr este redimensionamiento, se requiere limitar los mercados y favorecer a las localidades debido a que los principios generales de la nueva mirada sobre la economía se van tornando cada vez con mayor fuerza en formas de proceder, relacio-

narse, converger e interactuar entre los diversos actores sociales: desde iniciativas de comercio justo, cooperativas de consumo, instituciones micro-financieras o de financiamiento colectivo, mercados alternos, ferias de productos, entre muchas otras formas de expresión.

Una vez identificados los grandes principios que van perfilando una nueva forma de entender la economía, es posible revisar ciertos elementos específicos de la llamada Economía Popular, Economía Solidaria, Economía del Trabajo. Para empezar, se entiende por economía solidaria a la forma de producir, distribuir y consumir en que las relaciones solidarias y la cooperación mutua constituyen la base de la organización —empresas, asociaciones, cooperativas, familias, unidades domésticas— y de los circuitos de distribución económica. La solidaridad presente y operante en la economía da lugar a una racionalidad económica especial (Cotera, 2008).

Coraggio denomina de varias maneras a esta nueva forma de economía, según el tipo de énfasis que quiere asignar a lo nodal: el ser humano y la revalorización tanto de las relaciones como de su trabajo, antes que el ingreso o el beneficio propio. Así, en ocasiones el término alude a la economía del trabajo y en otras a la economía social, siendo siempre un factor común que sólo pueden comprenderse en contrapunto con la economía del capital¹³. Este autor asume

13 En una exposición bastante clara, Coraggio diferencia al liberalismo del neoliberalismo, con la siguiente fórmula: “mientras el liberalismo prometía que todos experimentarían una mejoría en la calidad de sus vidas (acceso creciente al consumo) individual e intergeneracionalmente, y para eso proponía [Mercado] + [Estado regulador y redistribuidor], el neoliberalismo reduce el segundo término al del [Estado que vela por el mercado libre] y en suma reduce la ecuación a [Mercado monopolista]” (Coraggio, 2011, p. 66). El liberalismo es uno de las tres vertientes de las virtudes democráticas para O'Donnell, en tanto es fundamento de los derechos y de la ciudadanía. Al desprenderse del lugar que posee el Estado como garante fundamental de los derechos, el neoliberalismo despoja a la sociedad a las manos del mercado.

la economía a través de la lógica del trabajo y su reproducción ampliada contra la hegemonía del capital y su acumulación.

Vamos a adoptar en este trabajo el término “Economía Social”, por su estatus teórico ya alcanzado, para contraponerlo a las vertientes de la Economía “a secas” (economics) y la Economía *Política*. [...] Nos referimos a una concepción que pretende superar la opción entre el mercado capitalista (al que asocia con la Economía “a secas”) y un Estado central planificador y regulador de la economía (al que asocia con las variantes del socialismo y la Economía Política). [...] Plantea que el Estado centralizado debe ser superado, porque sustrae poder de la sociedad y asume la representación de un bien común nacional actuando como delegado que, en ausencia de una democracia sustantiva, fácilmente cae en la tentación de obedecer a los intereses de los grupos económicos más concentrados, haciendo “gobernable” un sistema injusto y socialmente ineficiente. Esa doble superación se lograría evitando la separación entre economía y sociedad que caracteriza al paradigma neoliberal, pero a la vez evitando la intrusión de la política. Tal vez así se entienda su denominación expresa de “Economía Social” (Coraggio, 2014, pp. 43-44).

En concordancia con lo que manifiesta Coraggio, para otros autores la Economía Solidaria es un concepto que alude a la idea de solidaridad¹⁴, en contraste con el individualismo competitivo. Trata de actores como las organizaciones de productores, consumidores, ahorristas u otros. Cotera distingue dos características: a) estimulan la solidaridad entre los miembros a través de la autogestión, y b) practican la solidaridad con la población trabajadora, en especial brindando ayuda a los más desfavorecidos (Cotera, 2008).

La economía de mercado desconoce las condiciones sociales de exclusión o desigualdad, o las ubica en el lugar de “fallas del siste-

14 El artículo 85 de la Constitución del Ecuador señala: “Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad.”

ma” o “efectos colaterales”. Poniendo al ser humano en el centro del análisis, se pretende establecer límites sociales al mercado capitalista y, si es posible, construir mercados donde los precios y las relaciones resultan de una matriz social que pretende la integración de todos con un esfuerzo y unos resultados distribuidos de manera más igualitaria (Coraggio, 2014).

En lo planteado se evidencia el claro enfoque social de esta economía distinta y renovada, orientada a la amplitud social así como a la focalización en todos los actores que son parte del sistema, es decir, recupera la atención en quienes han sido excluidos, marginados o “expulsados” del sistema capitalista, principalmente los pobres. Ante la exclusión masiva generada por el sistema socioeconómico dominante, individuos, familias, grupos y comunidades han desplegado múltiples iniciativas de sobrevivencia innovando o volviendo a viejas prácticas (Coraggio, 2014).

Se reconoce también a unidades económicas populares nacidas en medio de la lucha por la generación de ingresos y la sobrevivencia de millones de personas que han creado su propia actividad económica como mecanismo de supervivencia. Esta economía popular solidaria, se consolida con base en apoyo mutuo, la cooperación y el intercambio de conocimientos, mercados o tecnología. La estrategia es maximizar el factor solidario para lograr la satisfacción de las necesidades básicas y generar acumulativamente procesos de desarrollo desde lo local, donde emerjan unidades productivas. Esta lógica se extiende a los emprendimientos, en el espacio de un mercado más solidario que competitivo, y de un planeamiento del desarrollo de abajo hacia arriba y que tiene en el Estado democratizado su referente más abarcador (Cotera, 2008).

Actores y prácticas

Tratando de mejorar la comprensión sobre la problemática, se ha propuesto que la economía social contemple dos vertientes: la de mercado, en donde operan las entidades más tradicionales, y otra de no mercado, donde operan organizaciones sin ánimo de lucro. Las primeras se crean para satisfacer las necesidades de sus asociados, donde puede haber una doble condición de socio y usuario de la actividad.

Son entidades productoras de mercado, en tanto operan en él vendiendo productos y obteniendo la mayoría de recursos. El elemento principal es que pueden distribuir excedentes entre sus socios-usuarios, pero no en proporción al capital aportado por cada uno de ellos, sino de acuerdo con la actividad que cada persona desempeña, como justicia y equidad en función del trabajo.

Esta definición distingue dos grupos de criterios, unos de corte más económico y otros de corte más social. Entre los de corte más económico se encuentran a) actividad continuada en la producción de bienes y/o servicios; b) un alto grado de autonomía; c) un nivel significativo de riesgo económico; y d) existe algún nivel de trabajo asalariado¹⁵ (Unceta, 2014).

Entre los criterios de corte social se destacan los siguientes: a) meta explícita de beneficiar a la comunidad o a un grupo específico de personas; b) iniciativa lanzada por un grupo de personas; c) el poder de decisión no está basado en la propiedad del capital; d) na-

15 Acosta, citando a Coraggio menciona un elemento fundamental: “El mercado no puede ser justo o injusto, ni solidario, pues se basa en el ejercicio irrestricto de la búsqueda individual de la máxima utilidad posible y ello supone considerar que todo lo externo es obstáculo a vencer o recurso a incorporar (incluso los otros, sea mediante el trabajo esclavo o, más modernamente, mediante el trabajo asalariado).” (Acosta, 2011, p. 25)

turaliza participativa que implica a las diversas partes implicadas en la actividad; y e) distribución limitada de beneficios (Unceta, 2014).

Según Razeto, la economía solidaria se caracteriza por una orientación fuertemente crítica y decididamente transformadora respecto de las grandes estructuras y los modos de organización y de acción que caracterizan la economía contemporánea. Desde este punto de vista constituye una disciplina donde los actores toman a la solidaridad, la cooperación y la reciprocidad como fuerzas económicas efectivamente existentes en la realidad social y con posibilidades de crear nuevas formas de hacer economía socialmente eficaces y eficientes¹⁶ (Citado en Unceta, 2014).

En este sentido, se encuentran varias acotaciones relevantes para considerar respecto de las características propias del sector y sus actores. Para Coraggio, si bien pueden existir grupos que hayan emergido como respuesta a los embates de la economía, el sector de la economía popular o de solidaridad no debe ser comprendido como un sector pobre, como una economía informal o de supervivencia necesariamente. El autor plantea a la economía popular —pensada como informal desde el análisis tipológico de la Población Económicamente Activa (PEA)—¹⁷, como un estado inicial de la economía social y solidaria y ésta a su vez, de la economía del trabajo.

16 Es complejo el punto en que la Economía Social, Solidaria o del Trabajo se encuentra con las lógicas y dinámicas del mercado. Si bien para varios autores se podrían incorporar elementos reconocidos como de mercado (la eficiencia o la eficacia), en los procesos de producción por ejemplo, los principios que regirán estas formas de organización deberán seguir respondiendo a la redistribución, la equidad o la reciprocidad. Como señala Unceta, los debates siguen abiertos en torno a los modelos para la inserción en el mercado, los problemas de la internacionalización, la competencia con las empresas de capital, la innovación y los métodos modernos de gestión, entre otros (Unceta, 2014).

17 Sánchez nos advierte ya sobre el tema, aun cuando las categorías con las que trabaja son en muchos casos inaplicables u obsoletos para caracterizar al sector: “En todo caso, economía popular y sector informal no son catego-

Este sector se concentra principalmente en la construcción de nuevas relaciones sociales entre las personas que integran la sociedad, en donde la solidaridad es un factor potente para la subsistencia de las personas o grupos sociales pobres o marginados. Razeto establece aspectos potenciadores como: la economía del sector popular, la promoción social, la participación social, la conciencia social, el trabajo como eje de la economía, el desarrollo alternativo e integral, la conservación del ambiente y la naturaleza, la promoción de la familia como núcleo organizador, la equidad de género o la interculturalidad.

La economía popular, puede ser entendida como un conjunto inorgánico de actividades realizadas por trabajadores, subordinadas directa o indirectamente a la lógica del capital, que deben accionarse para que se transforme en un subsistema económico orgánicamente articulado, centrado en el trabajo. La Economía del Trabajo, con una lógica propia, no estará subordinada a la del capital: la lógica de la reproducción ampliada de la vida de todos, integrada en sociedades más igualitarias y democráticas (Coraggio, 2014).

Coraggio muestra las diferencias de cada sector (capitalista/privada, pública y popular),¹⁸ en concordancia con el marco normativo del Ecuador, de acuerdo con los elementos constitutivos y unidades mínimas que lo componen:

rías iguales. La economía popular puede o no estar en el sector informal. El sector informal está conformado por los establecimientos de 10 trabajadores o menos que no tienen RUC o no llevan contabilidad o tiene cuadernos de cuentas” (Sánchez, 2014, p. 7).

- 18 Coraggio utiliza estas categorías en semejanza a las planteadas en la Constitución del Ecuador. En el artículo 283 señala que: “El sistema económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine.” Y en el artículo 309: “El sistema financiero nacional se compone de los sectores público, privado, y del popular y solidario que intermedian recursos del público.”

La economía capitalista se organiza mediante empresas, asociaciones y redes de empresas articuladas por la propiedad o grupos de control, o por el juego de relaciones recurrentes de mercado. La economía pública se organiza mediante los sistemas administrativo-burocráticos articulados por normas legales y las prácticas de gestión y control administrativo-político y se articula con el Sistema Político. La economía popular se organiza mediante unidades domésticas, redes de ayuda mutua, comunidades y asociaciones voluntarias diversas y a través de intercambios mercantiles o de reciprocidad.

La economía popular realmente existente es el sector agregado de las unidades domésticas de los trabajadores y sus organizaciones ad hoc, compuesto por:

- *el conjunto de recursos subjetivos y materiales, privados y públicos, que comandan los grupos o unidades domésticas (unipersonales o colectivas, familiares o comunitarias) que dependen para su reproducción de la realización ininterrumpida de su fondo de trabajo,*
- *las actividades que realizan para satisfacer sus necesidades de manera inmediata o mediata —actividades por cuenta propia o dependientes, mercantiles o no, competitivas o cooperativas—,*
- *los hábitos, reglas, valores y conocimientos que orientan tales actividades, y los correspondientes agrupamientos, redes y relaciones —de concurrencia, regulación o cooperación, internas o externas— que instituyen a través de la organización formal o de la repetición de esas actividades (Coraggio, 2014, pp. 99-100).*

Así como las empresas y sus cadenas y redes de articulación son la forma prototípica de organización de la Economía del Capital, las unidades domésticas y sus extensiones y redes lo son de la Economía Popular. Cada grupo doméstico, célula de la Economía Popular, orienta el uso de su fondo de trabajo y otras prácticas económicas, de modo de lograr la reproducción de sus miembros en las mejores condiciones a su alcance. Al hacerlo, está dispuesto a competir con

otras UD, incluso a costa de la sobrevivencia del otro, comportamiento inducido por el mercado y el Estado capitalistas.

Contrariamente, la Economía del Trabajo se plantea como sistema alternativo otras relaciones de poder más democráticas, otros valores y otro sentido estratégico: la optimización de la reproducción ampliada de la vida de todos, lo que supone niveles de diálogo y cooperación, de decisión colectiva, de reconocimiento de necesidades, de diseño de estrategias para su gestión colectiva, aspectos a ser planteados frente a un aparato estatal que posee la capacidad de integrar los elementos necesarios para su aplicación (Coraggio, 2014).

Políticas públicas y Estado

Quizás sea uno de los grandes méritos de las políticas públicas para la economía de los sectores populares y solidarios: tratar lo económico y lo social como dos fases de una misma moneda.

(Kapron & Fialho, 2011)

En el momento que un problema, conflicto o propuesta social renovadora o generadora de cambio es incorporada en una agenda estatal se convierte en una “cuestión socialmente problematizada.” A partir de que es identificada e incorporada a la agenda de discusión pública, toda toma de posición, definición conceptual y posterior diseño, gestión o aplicación de un curso de acción a ser emprendido o adoptado por un actor en representación del Estado, frente a dicha cuestión, puede ser considerado como una política pública (Oszlak, 2009).

El Estado requiere de políticas públicas para una gestión coherente y estas pueden tener formas más o menos estructuradas, técnicamente elaboradas, explícitamente presentadas o incorporadas por la institucionalidad en formatos de carácter administrativo.¹⁹ De

19 Si bien las herramientas mínimas de la Administración Pública (desde reglamentos, acuerdos ministeriales, resoluciones, instructivos, lineamientos

cualquier forma, el carácter renovador que modificará la aplicación a largo plazo de acciones por parte de los Estados y sus formas usuales de concebir la realidad, es mediante espacios participativos para la formulación de políticas públicas.

Participación social, popular, comunitaria, ciudadana, son algunos de los nombres utilizados para designar un proceso según el cual determinados actores de la sociedad civil se movilizan, se “activan”, irrumpen en un escenario público e intentan influir sobre las reglas y procesos que enmarcan sus condiciones de existencia y reproducción, particularmente, sobre las políticas estatales y el modo de organización social a las que ellas apuntan (Oszlak, 2009, p. 6).

Se ha identificado la multiplicidad de los espacios y niveles en que la sociedad civil puede participar como parte consultiva dentro del ciclo de la política pública. Son diversos tanto los mecanismos como los niveles de gobierno con los cuales se puede interlocutar así como son diversos los actores que, desde procesos de movilización ciudadana o colectiva, problematizan una temática social, en el proceso de construcción de consensos en agendas compartidas y brindando insumos para la elaboración de una propuesta que será formulada en forma de política.

Según los ciclos de la política pública, ésta siempre llegará a estar amparada en un marco normativo, que después podrá ser adoptada vía la incorporación a nivel presupuestario —lo cual garantiza su existencia y condiciones de aplicación mínimas—, pasando por el filtro de una instancia legislativa macro de aprobación del presupuesto como la asamblea o los consejos metropolitanos en los

o metodologías), no son políticas públicas en sí, conlleva implícitas formas de concebir la realidad y las diferentes temáticas que cada institución pueda tratar. Se esperará que las políticas públicas superen la implementación de políticas institucionales como esta serie de mecanismos puntuales aun cuando deberían, en última instancia, decantar en dichos mecanismos.

gobiernos locales. Dentro de este ciclo, la incorporación en la agenda pública, espacio de priorización y tratamiento de temáticas, ya ha sido ganado por la Economía Social y Solidaria en el Ecuador, aun cuando la valoración de los consensos sobre las definiciones y conceptos puedan ser menos optimistas.²⁰

En gran medida, los grupos sociales han podido incidir en el ciclo de la política pública, sobre todo al momento de elaborar la agenda y posicionar una temática. Adicionalmente, se ha logrado incluir ciertos conceptos en el marco normativo de la Economía Popular. Una vez logrado esto, determinada política podrá ser implementada con adecuados mecanismos de seguimiento y evaluación —consejos consultivos, rendición de cuentas, veedurías—, realizándose los correctivos necesarios a la gestión y, finalmente, se evaluará dicha política hasta llegar a un nivel de impacto, donde se podrá observar cual fue la real incidencia y modificación de condiciones de vida de la población o problemática motivo de la política, como se muestra en el anterior gráfico.

20 Señala Guerra que las políticas públicas y las legislaciones sobre el sector de la EPS aún no han generado consensos en cuanto a la delimitación del objeto de estudio. Mientras que las orientaciones clásica y sectorial incluyen básicamente las diferentes formas asociativas de carácter socioeconómico (cooperativas, mutuales, etc.), la orientación autogestionaria recorta el objeto a las organizaciones asociativas donde no hay diferencia en los roles del trabajador y el empresario. A ello se le suman otras orientaciones como la popular (incluyendo unidades autónomas y familiares) y la alternativa (incluyendo un amplio abanico de organizaciones y prácticas económicas con fines alternativos más allá de sus formas jurídicas). Sería de mucha importancia para el sector solidario de la economía avanzar de la etapa actual caracterizada por las “definiciones privadas” a una etapa de consensos acerca de una definición legitimada académica, social y legalmente (Guerra, 2012, p. 90).

Gráfico 1
Ciclo de política pública

Elaboración: Autora, basándose en Guillermo Schweinheim

El proceso de elaboración e implementación de las políticas públicas para la economía solidaria y para la economía social permite la ampliación de los espacios de interacción entre el Estado y la sociedad organizada, reconociendo, acotando o ampliando los límites de la actuación de la esfera estatal, a través de arreglos institucionales que generen espacio en común entre instituciones gubernamentales y entidades civiles —organizaciones no- gubernamentales, iglesias, universidades, institutos de investigación, centrales sindicales (esfera estatal)— (Kapron & Fialho, 2011, p. 346).

El carácter “público” que legitima las políticas, dependerá de la mayor o menor participación que se haya logrado en cada una de las fases del ciclo. Cuanto más intensa sea la participación de la sociedad en la formulación y la ejecución de las políticas públicas y cuanto

mayor sea su campo de actuación y sus resultados, más fuerte será su carácter público de una política. La definición de criterios de acceso a las políticas, a través de la formación de consejos, con amplia participación de los usuarios de un servicio,²¹ en espacios de organización social o el involucramiento directo de estos en la ejecución de las políticas, es la forma que busca ampliar el control de las políticas más allá de la esfera estatal (Kapron & Fialho, 2011, p. 347).

Participación y transición

Si bien existe una corriente que se manifiesta opuesta al Estado, por considerarla como espacio excluyente de ejercicio de la hegemonía o por pensarlo como un instrumento de las minorías o las élites económicas, por su papel institucionalizador de la pobreza o la diferencia, por su lógica de acumulación de poder para una clase política, existe otra corriente cuya práctica no es anti-Estado.

En este sentido Coraggio señala:

Por el contrario, aunque ésta admite la necesidad de cobrar autonomía desde la misma base económica de la sociedad, a la vez se propone incidir crecientemente en la encarnación de sus valores en el seno de la administración pública y del sistema político. Las formas de gestión participativa a nivel local, la creación de foros participativos para definir políticas sectoriales, las instituciones del presupuesto participativo o de la planificación estratégica participativa, así como la organización de frentes de acción colectiva para modificar las políticas del Estado a favor de regular la economía y los mercados capitalistas, de fomentar —incluso normativamente— la economía

21 Para Favreu, el crecimiento de los espacios de economía social, sobre todo en la relación con políticas públicas, ha generado críticas acerca de una posible sustitución de servicios públicos con pérdidas de derechos sociales conquistados. El contrapunto señala hacia la ampliación de los espacios bajo el control de las comunidades ya que éstas tienen una capacidad mayor para construir su desarrollo, desde sus propias lógicas y con sus propias prácticas (Favreau, 1998).

social, y de practicar en general la democracia participativa, son recursos que hacen parte fundamental de una economía social que no se plantea ser antipolítica sino pro democracia participativa (Coraggio, 2014, p. 49).

Aun cuando se considere al Estado como el espacio antagónico por excelencia, será siempre un elemento de la ecuación. Del lado de la sociedad civil, puede estar el movimiento obrero, diversas corrientes y sus variantes, una pluralidad de fuentes ideológicas y político-partidarias, diversas matrices culturales. Las iniciativas pueden ser, anárquicas y antisistémicas o responder a proyectos explícitos de construcción de otro sistema social o político. De hecho, aunque se presente como apolítico, todo proyecto que propicie la Economía Social como sistema es político y decantará en el espacio de lo político, porque pretende transformar la realidad por la acción colectiva.²² (Coraggio, 2014, p. 53)

Acosta menciona que Ecuador es, posiblemente, el país donde más se ha avanzado en la línea de reconocimiento de la iniciativa de la económica popular y solidaria con una proyección hacia las relaciones solidarias, algo que se refleja en la creación del Instituto

22 Touraine menciona que una lucha solo puede ser reconocida como tal si responde a cuatro condiciones principales. En primera instancia, ésta debe ser conducida en nombre de una población particular. Existen unas luchas obreras o campesinas pero también unas luchas de consumidores o de habitantes de un barrio. Unos movimientos de ideas o de opiniones, un movimiento religioso o unos movimientos de tolerancia, aunque todos importantes, no pueden servir directamente de objeto para nuestra reflexión. En segundo lugar, estas luchas deben estar organizadas y no pueden existir solamente al nivel de la opinión, puesto que es necesario que exista cierta organización para que el conflicto se precise y para que el movimiento alcance cierta integración. En tercer lugar, se debe combatir un adversario que pueda estar representado por un grupo social, aun si —como a menudo sucede—, el adversario es definido en términos más abstractos: el capitalismo o el Estado (Touraine, 2006). En función de estas condiciones, las iniciativas vinculadas a la EPS parecerían tener un carácter movilizador nítido de lucha social.

de Economía Popular y Solidaria y en la iniciativa de Ley del mismo nombre, que además crea una Corporación Nacional de Finanzas Populares y una Superintendencia especializada en esta economía (Acosta, 2011).

Las instituciones estatales se han separado en general de su responsabilidad por representar los intereses de las mayorías, mostrando en cambio una predisposición a priorizar las reformas impulsadas por el capital financiero y sus expertos internacionales, los que no han sido capaces de prevenir ni de moderar el impacto social de la catástrofe y que sin embargo los siguen aconsejando (Coraggio, 2014, p. 86).

El camino del desarrollo local o regional tiene que ser fundado principalmente —aunque no exclusivamente— en una combinación de procesos y recursos endógenos y redes de articulación horizontal que los potencie. Esto no significa la autosuficiencia ni el aislacionismo, porque los recursos locales deben potenciarse mediante intercambios, mercados y redes interlocales, imprescindibles para acumular el poder necesario para refundar el Estado democrático y una alternativa de orden global (Coraggio, 2014, pp. 87-88).

Efectivamente, la generalización del desarrollo desde lo local sólo puede darse si comienzan a modificarse las políticas públicas locales, provinciales y nacionales, en los distintos niveles de gobierno, buscando incluir como estrategia la promoción y canalización de recursos públicos para este enorme proceso de nuevo desarrollo. Para Brand, es fundamental el accionar del Estado y las prácticas sociales en su conjunto, es necesario cambiar prácticas socioeconómicas y culturales mediante políticas públicas adecuadas. Siempre conscientes que dichas prácticas tienen su origen en luchas y propuestas que surgen desde la sociedad (Brand, 2011, p. 145).